

Opinión

¿Perderemos la oportunidad en energía?



Alberto Nadal

Vicesecret. Economía y Desarrollo Sostenible del PP

La economía no puede prosperar sin energía. No es posible atraer inversión ni sostener el crecimiento económico, la mejora de la productividad, el incremento de los salarios o el mantenimiento del Estado del bienestar sin un suministro energético suficiente, seguro y competitivo. Los países que acierten en su política energética, tecnológica y de digitalización contarán con una ventaja decisiva en las próximas décadas; los que fallen se quedarán atrás. España reúne las condiciones necesarias para sumarse a esta nueva revolución, atraer inversión y participar de su desarrollo. Todas, salvo una: la política energética del Gobierno socialista.

La política energética de los últimos ocho años ha sido un fracaso. El primer apagón de nuestra democracia, el desaprovechamiento de energía renovable, el encarecimiento de los mercados de ajuste, las dificultades de acceso a la red, el calendario de cierre nuclear y un intervencionismo creciente obligan a revisar una política que condiciona las oportunidades de inversión y crecimiento, y compromete la propia seguridad de suministro.

En la raíz del problema hay una combinación de radicalismo ideológico, incapacidad de gestión y una planificación deficiente. Se han fijado objetivos sin garantizar las condiciones necesarias para cumplirlos, trasladando señales equivocadas a los inversores.

Es necesario descarbonizar y reducir la dependencia de los combustibles fósiles importados, tanto por razones medioambientales como económicas, dado que España no es productora de hidrocarburos y debe reforzar su autonomía frente a terceros países. Ahora bien, esa transformación ha de tener en cuenta las capacidades tecnológicas, los costes y el contexto internacional.

Descarbonizar exige realismo económico y tecnológico. Europa ha realizado un esfuerzo considerable de reducción de emisiones, un esfuerzo que debe continuar. Pero ha llegado el momento de reflexionar sobre los ritmos, sin igno-

rar la competencia internacional ni los riesgos de deslocalización industrial y agrícola. Los beneficios de la descarbonización y de una mayor independencia energética deben contrastarse siempre con sus costes.

Ese realismo obliga a flexibilizar los plazos y a emplear todas las tecnologías disponibles, incluida la energía nuclear. Las centrales ya construidas constituyen un activo del sistema: aportan generación estable y electricidad sin emisiones directas de CO2, y deben continuar operando mientras cumplan las exigencias de seguridad y viabilidad económica.

Con todo, el principal error ha residido en la planificación y ejecución de las redes. Si el objetivo era descarbonizar con rapidez, resultaba imprescindible desplegar la infraestructura necesaria para integrar más generación renovable y atender una demanda creciente.

La contradicción es evidente: se pretende incorporar nueva generación y aumentar el consumo eléctrico, pero no se garantiza que ambos puedan conectarse entre sí. Existe energía renovable que no puede aprovecharse plenamente, proyectos de generación con dificultades para acceder al sistema y nueva demanda que tampoco encuentra acceso. Hay demanda, hay oferta, y falta la infraestructura intermedia que conecta a quienes producen electricidad con quienes la necesitan.

Este cuello de botella compromete inversiones industriales, centros de datos y desarrollos residenciales. La responsabilidad política consiste en anticipar estas necesidades, planificar las actuaciones y vigilar su ejecución, tanto en transporte como en distribución. Anunciar objetivos de electrificación sin asegurar las redes necesarias supone trasladar el coste de la imprevisión a empresas y ciudadanos.

Ante la escasez de accesos, el sistema debe ser neutral, y la respuesta no puede consistir en convertir al Gobierno en árbitro político de quién accede y quién no. Mientras se ejecutan las inversiones necesarias, es preciso priorizar, pero con criterios claros, objetivos y transpa-

La política energética de los últimos ocho años en España ha sido un fracaso

rentes, atendiendo a la vivienda y al desarrollo de la actividad económica. La discrecionalidad no hace sino añadir incertidumbre a un problema ya existente.

¿Qué es necesario hacer? Primero, aplicar una política energética realista, que adapte los ritmos de descarbonización a la tecnología disponible, los costes, la demanda real y el contexto internacional. Segundo, aprovechar todas las fuentes que contribuyan de manera eficiente a ese objetivo, incluida la nuclear. Tercero, resolver el problema de los accesos mediante inversión, una planificación flexible y la identificación de las actuaciones críticas capaces de aliviar antes la presión sobre el sistema. Cuarto, reducir los precios de la electricidad mediante la contención de los costes de los servicios de ajuste, que se han multiplicado por ocho desde que gobierna Pedro Sánchez.

Para ello, es preciso crear los incentivos adecuados que permitan a los operadores invertir y facilitar que el sector privado contribuya a financiar y ejecutar las infraestructuras necesarias. El PP pondrá en marcha un plan de choque para desatascar el acceso a las redes en un plazo máximo de dieciocho meses. Resolver esta emergencia exige gestión, coordinación, seguimiento y cambios regulatorios.

En definitiva, la tarea pendiente no es solo instalar más capacidad de generación, sino garantizar que esa energía llegue a quienes la necesitan de forma segura y a costes asumibles. Esto pasa por dar oportunidades al almacenamiento energético, por mantener una fiscalidad energética que no deteriore nuestra competitividad y por impulsar inversiones que refuercen la seguridad y la eficiencia del sistema. Si España acierta en estas cuatro líneas de actuación –realismo en los ritmos, aprovechamiento de todas las tecnologías, desbloqueo de los accesos a la red y reducción de los costes de ajuste–, puede convertirse en la gran potencia energética de Europa. El reto no es solo tecnológico: es, ante todo, una cuestión de gestión y de voluntad política.